

2979-S-03

(S.-2.979/03)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1° – La venta de telefonía celular móvil podrá realizarse, únicamente, a través de las empresas licenciatarias autorizadas para ello, quedando prohibida la actividad de revendedores y mayoristas que no tengan ese carácter.

Art. 2° – Dichas empresas comercializarán los equipos celulares objeto de su actividad, dejando expresa constancia del número de documento del adquirente y del titular de la línea, en el caso de tratarse de personas diferentes, y de todos los demás datos personales que permitan una clara identificación de los mismos, incluyendo certificado de domicilio. No podrán figurar a nombre de personas jurídicas ni de organismos del Estado. Estas previsiones se cumplirán aun en aquellos casos en que los equipos se habiliten sólo para su uso con créditos provenientes de tarjetas para telefonía celular.

Art. 3° – Queda prohibida, en el ámbito del mercado interno, la venta, la importación y la exportación temporaria de telefonía celular móvil usada o reciclada, quedando autorizado el Poder Ejecutivo nacional para establecer –por vía de reglamentación– las excepciones al presente artículo, así como las condiciones bajo las que se llevarán adelante, con fundamento, únicamente, en la satisfacción de necesidades básicas e impostergables de la población. Dicha reglamentación no podrá eximir del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2° de la presente.

Art. 4° – La transferencia de equipos celulares móviles se hará en las condiciones establecidas en dicho artículo 2°.

Art. 5° – La venta de tarjetas de telefonía destinada al uso de equipos celulares móviles, se hará sólo a través de las bocas de expendio autorizadas por el Poder Ejecutivo nacional, y siempre bajo constancia del nombre y número de documento del adquirente.

Art. 6° – Modifícase el artículo 45 del Código Penal, quedando redactado como sigue:

Artículo 45: Los que tomasen parte en la ejecución del hecho o prestasen al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido cometerse, tendrán la pena establecida para el delito. En la misma pena incurrirán los que hubiesen determinado directamente a otro a cometerlo.

Se aplicarán asimismo las penas previstas para los partícipes a quienes, en forma injustificada, o debiendo sospechar, por las circunstancias del caso, acerca de su aptitud para contribuir a un resultado dañoso, introdujeran en el país, portaren, comercializaren, volcaren al mercado interno, acopiaren, proveyeren, suministraren o conservaren en su poder, bienes, materiales, instrumentos o cualquier otra clase de elementos conocida o públicamente destinados o utilizados para cometer alguno de los delitos previstos en este código, posibilitando o facilitando su ejecución, aunque no tomaren parte en la ejecución del hecho.

Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Miguel A. Pichetto.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Tanto el Poder Ejecutivo nacional como este Congreso de la Nación se han esforzado por encontrar una urgente solución normativa al problema de la inseguridad y más específicamente, al tema de los secuestros extorsivos.

Resultado de ese accionar conjunto, han sido las leyes 25.742, 25.760, 25.764 y 25.765 que, respectivamente y con fundamento en el denominado Informe Arslanian, han modificado el Código Penal, en lo que hace a la privación ilegítima de la libertad y al secuestro extorsivo; el Código Procesal Penal de la Nación, en cuanto atribuye más facultades a los integrantes del Ministerio Público; han creado el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados de Secuestro Extorsivo, y finalmente, han posibilitado un fondo de recompensas, destinado a obtener la mayor cantidad de información para luchar contra este delito.

Sin embargo, a pesar de ese esfuerzo, vemos cómo, en la práctica, el secuestro extorsivo se sigue llevando adelante, facilitado por una serie de conductas que, si bien no forman parte de la ejecución del hecho, o de su posterior encubrimiento, asumen el carácter de conductas predelictuales que posibilitan el resultado.

A través de mi iniciativa S.-2.169, reproducción del proyecto de mi autoría 2.867-D.-99, vengo insistiendo en la necesidad de tipificar dicha conducta predelictual, destinada a la prevención de hechos previos, aunque de menor entidad delictiva, pero que de todas formas contribuye al resultado final, aunque quien los lleve adelante no tome parte en la ejecución del hecho o no preste al autor su colaboración o auxilio en el hecho puntual.

En esas dos oportunidades lo he hecho acotadamente, es decir, he circunscripto mi iniciativa a los delitos contra la propiedad, refiriéndome a la introducción, portación o conservación, en forma injustificada, de materiales o

instrumentos conocidamente destinados a cometer alguno de los delitos previstos en ese título.

No obstante, advierto la necesidad de extender estas previsiones a todos los delitos del Código Penal, en la medida que, por ejemplo, el delito que está causando mayores estragos sobre la población, ello es, el aludido secuestro extorsivo –que atenta contra la libertad de las personas– se vale de una serie de instrumentos o elementos, que circulan no sólo de manera ilegal por el mercado interno, sino que permiten, de manera legal, su utilización como elemento óptimo de colaboración para los delincuentes y para la perpetración del delito.

Me refiero a la telefonía celular móvil, la que es de toda necesidad para llevar adelante el delito de que se trata, en la medida que los delincuentes necesitan el contacto con los familiares de las víctimas para negociar su rescate, sin ser localizados.

Más específicamente todavía, hago alusión al tema de los bolseros y a ciertas condiciones de comercialización de las empresas, que contribuyen en forma directa a la proliferación y recrudecimiento del secuestro extorsivo.

Legalmente, la cantidad de celulares a nombre de una persona puede ser ilimitada, estando permitida su activación a nombre de otro, e inclusive con el sistema de tarjetas.

Este último sistema facilita aún más el delito, en la medida que no se emiten facturas a su respecto.

Se suma a ello la posibilidad de modificar el número de serie del aparato cuando éste es de origen ilícito, hallándonos entonces ante un panorama muy difícil de desarticular.

Estas circunstancias son de público conocimiento. También es de público y notorio el aprovechamiento que la delincuencia hace de las mismas, no sólo en cuanto al delito al que nos referimos, sino respecto de cualquier otra actividad ilícita en que pueda estar incurso quien se encuentra al margen de la ley.

Hay que agregar que, conforme la legislación vigente, para ser partícipe de un delito hay que producir el resultado o contribuir a su producción.

En efecto, refiere Sebastián Soler (*Derecho penal argentino*, tomo II, páginas 275 y ss., TEA 1989), que participar es una forma de actuar. El partícipe contribuye efectivamente a la producción del hecho, haciéndose responsable de ese hecho. Es partícipe quien no puede ser calificado como autor.

Para ser partícipe hace falta una obra en común; como dice Soler, una “comunidad” de acción, que sitúe al partícipe como la parte de un todo, es decir, del delito, y un “conocimiento” de la propia acción como parte de ese todo.

Así planteadas las cosas, es muy difícil enrostrar su conducta a quien, no participando en un hecho específico, comercializa o provee, por ejemplo, celulares, sin adoptar mínimos recaudos acerca de su titularidad, o los posee, sin ser una empresa de telefonía, en condiciones o en un número tal que demuestran que nunca pueden ser para uso personal, ni tampoco se justifican en función de su oficio o profesión.

Esas personas, como mínimo, “tienen” que estar ante la sospecha de que la circulación de los mismos, en las condiciones de su posesión, puede contribuir a la comisión de delitos.

Propongo entonces, una serie de reglas básicas, para evitar que la utilización y circulación de celulares contribuya a alentar la comisión de ilícitos, cualquiera que sean, pero en especial, el secuestro extorsivo: en primer lugar, corresponderá su comercialización sólo a través de quienes estén autorizados para ello, evitando la actividad de revendedores y mayoristas –bolseros– no dedicados al mercado de las comunicaciones; en segundo lugar, las empresas deberán identificar al usuario o titular del celular de que se trate, en forma acabada, debiéndose realizar la venta de las tarjetas de telefonía destinadas a dichos equipos, también en forma individualizada.

Resulta asimismo atinada, entre otras cosas, la prohibición de venta de celulares usados o reciclados, como su importación y exportación temporaria, en la medida que dichas actividades facilitan la concreción de un mercado en donde insertar la telefonía celular producto de ilícitos, y que son nuevamente utilizados en otros delitos, habida cuenta de su virtual blanqueo.

También propongo que las reglas de la participación criminal se apliquen a quienes incurran en aquellas conductas predelictuales que signifiquen la facilitación para la comisión de los delitos previstos en el Código Penal, a través de una serie de conductas que sirven para abastecer a la delincuencia de los instrumentos necesarios para continuar y perpetuarse en el delito.

En definitiva, estas personas no son parte de una asociación ilícita, y en tal sentido, no matan, no roban, no lesionan, no falsifican, y en definitiva, tampoco secuestran, y sólo pueden ser detenidos en “in fraganti” delito, pero su conducta permite que todos esos hechos se lleven a cabo, pues por ejemplo, el sólo hecho de hacer circular ganzúas, armas y celulares en determinadas circunstancias, entre otros elementos, hace que no puedan estar en desconocimiento respecto del poder ofensivo de los mismos, y en tal sentido, debe analizarse su conducta a la par de quien lleva adelante el hecho punible, pues también ha contribuido al resultado, y sabe, por los actuales índices de inseguridad, que así lo ha hecho.

Por todo lo expuesto, solicito la sanción de este proyecto.

Miguel A. Pichetto.

–A las comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Justicia y Asuntos Penales.